

Nuevo pensamiento

Perspectivas para una segunda parte de la legislatura

Manuel Escudero

PERSPECTIVAS PARA UNA SEGUNDA PARTE DE LA LEGISLATURA

Retrato de la situación actual

La deslegitimación a la que están sometiendo el PP y sus socios de Vox al Gobierno progresista desde que éste se formó, el 16 de Noviembre de 2023, es obviamente inconstitucional e incluso claramente antisistema, y supone una aciaga novedad en la historia de la democracia española: ni Felipe González ni Rodríguez Zapatero se vieron enfrentados desde el comienzo de su mandato a la virulencia brutal de esta ofensiva constante y creciente.

Los medios utilizados por las derechas para desarrollarla son conocidos: las armas de la **desinformación y las medias verdades** combinadas con la **polarización**, mediante exageraciones incesantes, acusaciones sin pruebas y el insulto como arma parlamentaria, sustentadas en el **lawfare o el activismo político de diversos jueces**, alargando causas en las que lo que menos importa es la presunción de inocencia o el veredicto final.

También es conocido el efecto devastador que está teniendo esta estrategia, **debilitando las instituciones, la cultura y la convivencia democrática española**.

Hagamos un repaso. La deslegitimación, la tesis de que este Gobierno no merece gobernar y hay que desalojarlo de modo inmediato, ha sido fundamentada, sucesivamente, en diversos motivos de grueso calibre, que se han ido desgastando a lo largo de los meses, siendo sustituidos por nuevos: desde el mismo momento de la constitución del Gobierno en 2023, el argumento que se utilizó fue que éste se formaba sobre la base de una **coalición “contra natura” con los enemigos de España**. Luego le siguió la **denuncia de la amnistía**, cuya aprobación parlamentaria para Feijóo suponía el “acta de defunción” del PSOE y de una legislatura que “empieza y puede acabar aquí”. Cuando esto no ocurrió, más adelante, se pasó a la tesis de un gobierno exhausto e **incapaz de gobernar por no tener presupuestos**, un argumento falso en una situación de crecimiento económico robusto como es el caso español, donde los ingresos fiscales no paran de crecer. Y este argumento dio pie, seguidamente, a la denuncia del **presidente del Gobierno como un autócrata, un dictador**. Unos meses después, a raíz del gran apagón y los sabotajes en las comunicaciones ferroviarias se pasó a la **acusación del caos en la gestión**. Por último, en la actualidad, el argumento central respecto a la ilegitimidad, sobre el sustrato de todas las anteriores, ha convergido en la imagen de un **Gobierno cercado y acorralado por la corrupción**. En las últimas semanas, la espiral de acusaciones de ilegitimidad se ha escalado hasta el paroxismo, guiada por una desesperada impaciencia y frustración, redoblando la ofensiva para pedir elecciones inmediatas, presentando la situación como la de un gobierno “en caída libre” y agonizante, retratando a su jefe de filas, traspasando ya todas las líneas rojas, como **capo de un gobierno mafioso**, y llamando a una manifestación de todos los españoles bajo el lema “mafia o democracia”: toda presión es poca para exigir unas nuevas elecciones, sobre el andamiaje **de la gran mentira de una pretendida, y nunca demostrada, corrupción del Gobierno**.

Centrar los tiros de la deslegitimación **en la corrupción es una estrategia que no derribará al Gobierno progresista**, fundamentalmente porque por mucho que se estire el *lawfare*, ni el Gobierno ni su jefe de filas, Pedro Sánchez, ni sus familiares son corruptos, y porque las acusaciones de corrupción ni parecen preocupar enormemente a los españoles (es la

preocupación nº 9 de la última encuesta del CIS de mayo de 2025, con un 7,1 %) ni hacen mella apreciable en las intenciones de voto.

Pero incluso si este argumento de deslegitimación centrado en la corrupción pincha eventualmente como un globo que solo tenía aire, la estrategia, que cada día se acerca más en su relato y acciones a un golpismo revestido de ropajes democráticos, seguirá con nuevos argumentos.

Esta estrategia ha **secuestrado la agenda pública política y mediática**. Día sí y día también, los grandes espacios en la prensa, las televisiones y las redes sociales, sean del signo que sean, se centran en debates **a partir de la agenda que las derechas han ido eligiendo sucesivamente como epicentro de la deslegitimación del Gobierno**. Y es que la estrategia se lleva a cabo mediante una coalición presidida por el equipo dirigente de Feijóo, - amplificado por medios de prensa y pseudomedios de comunicación, programas de debate en radio o televisión que los secundan, escorados hacia comentaristas rabiosos o “equidistantes”, y bots, trolls, astrosurfers, influencers y youtubers en las redes sociales perfectamente alineados: un ejército engrasado, en el que **Feijóo** ha de agradecer la infatigable avanzadilla que representa su compañera de filas **Isabel Díaz Ayuso en Madrid** y la alianza impagable con **Vox y Abascal, los verdaderos maestros y artífices de esta coalición**.

Este es, por tanto, el panorama actual. Un panorama en el que las derechas se van desesperando y **aceleran su coacción utilizando todos los medios a su alcance para derribar al Gobierno a base de presiones de todo tipo, con el lawfare y la gran mentira de la corrupción como sus arietes principales**. Y lo más asombroso consiste en que, cuando en la cumbre de la excitación de las derechas se reclaman unas nuevas elecciones, **aún no se han cumplido ni los dos años desde el comienzo de la legislatura**, aún no se ha pasado el ecuador de la misma.

Por eso, es pertinente preguntarse sobre los dos años que restan de Gobierno progresista en esta legislatura, y es útil conceptualizarlos como **un segundo tiempo, como una segunda fase**.

Segunda parte de la legislatura: algunas reflexiones estratégicas

El Partido Popular liderado por Feijóo no abandonará **voluntariamente** su estrategia de deslegitimación cada día más frenética, por dos motivos:

- Por un lado, aunque no consiga impedir que el Gobierno gobierne, ni precipitar unas elecciones antes de 2027 (como establecen las reglas de la democracia española en ausencia de una moción de censura exitosa) mediante la estrategia de la deslegitimación, intenta hurtar al Gobierno **el crédito público** por los logros sociales y económicos que está consiguiendo, tanto en el terreno macroeconómico y de la transformación económica estructural de España en su transición ecológica y digital, como en el terreno del progreso social: unos logros espectaculares y que están siendo cabalmente reconocidos por todos los organismos internacionales sin excepción. Esta esterilización de la labor del Gobierno se refleja en la manifiesta contradicción de que cuando se pregunta a los ciudadanos por la situación económica de España, solo un 32,8% afirma que es “muy buena o buena”, mientras que esas mismas personas llegan al 65,8 cuando aseguran que su situación económica **personal** es “muy buena o buena” (Barómetro CIS, mayo 2024).
- Por otro lado, la derecha española no abandonará su estrategia porque la centralidad conseguida con esta guerra sucia y sin cuartel tiene, sobre todo, un efecto de **alienación**

de grandes sectores ciudadanos, particularmente los más preocupados por el bien común que, enfrentados a este tensionamiento constante y creciente de la vida pública, comienzan a alejarse de la misma como un espectáculo complejo y manifiestamente desagradable, optando por dedicarse a lo que interesa, sus afanes del día a día más allá de la política, los políticos y el bien común.

El PP abandonará esta estrategia solamente si se ve forzado a ello. Y ello únicamente ocurrirá por tres razones: porque se le planta cara **con una ofensiva democrática** que clarifique sus tendencias antidemocráticas, porque su estrategia **erosiona sus bases electorales** o, finalmente, porque erosiona **su alianza con la extrema derecha**.

Por ello, tentativamente, se sugieren **tres vías complementarias**:

La primera es emprender en la segunda parte de la legislatura **una ofensiva democrática**. En una [nota editorial de AVANZA](#) ya se planteaba esta vía: “Se hace necesaria firmeza y contundencia en la respuesta frente a los desmanes más gruesos de la estrategia antidemocrática de las derechas », se decía allí. Pues bien, en unos pocos días ha quedado claro con el *lawfare* emprendido contra el Fiscal General, que estamos ante uno de esos desmanes más gruesos. Habrá quien, con ánimo bienintencionado de defender ante todo las instituciones, plantee que el Fiscal General debe dimitir para mejor defenderse. Pero el Fiscal General no es culpable de nada, la instrucción es plenamente irregular y parcial, desoyendo testimonios cruciales en la causa, e inculpa al Gobierno sin aportar prueba alguna. El *lawfare* impulsado por la derecha **no busca el veredicto final de la causa, sino cobrarse cuanto antes una pieza importante en su escalada por forzar el derrumbe del Gobierno**. Si los que están de cacería se la cobran mediante la dimisión del Fiscal, les dará ánimos renovados para perseverar en su espiral. Por ello, ha tenido todo el sentido el apoyo pleno que el Gobierno ha dado al Fiscal General, renovando su plena confianza en él ante la instrucción del juez Hurtado.

La segunda es incidir en **aquellas áreas y políticas concretas en las que el PP no tenga otro remedio que entrar en el debate, pues no hacerlo puede hacer peligrar su alianza con Vox**, que es la que le puede, hipotéticamente, proporcionar en el panorama electoral actual el gobierno de la nación. En este terreno, señalaba **Cristina Monge**, miembro del Patronato de la Fundación AVANZA, en un artículo reciente, las áreas estratégicas en las que merece la pena desplegar una ofensiva: **“la migración, el feminismo y la transición ecológica** son tres de los ejes que se tornan estructurales, están abriendo profundas brechas por donde se cuelan los discursos xenófobos, machistas y negacionistas.” Esta sugerencia es toda una hoja de ruta para **señalar prioridades en las iniciativas políticas que se desplieguen en la segunda parte de la legislatura** (por poner un ejemplo, las políticas de integración cultural y social de inmigrantes apenas abordadas hasta ahora en España), porque obligarán al PP a definir posturas en debates sobre políticas específicas que no comprometan su relación de asociación con su socio de extrema derecha. A esta hoja de ruta hay que añadir **algunas cuestiones internacionales**, tanto en el campo de las **políticas europeas**, donde la alianza de las fuerzas progresistas plantean problemas a los conservadores europeos en sus vacilaciones con la extrema derecha antieuropea, como con respecto a algunas **cuestiones cruciales de geopolítica**, como la lucha contra el **genocidio en Gaza, una paz justa y sostenible en Ucrania o la política respecto a China**, en las que el PP se vería obligado a intervenir para no deteriorar sus relaciones con Vox, el trumpismo y sus aliados a escala internacional.

La tercera es introducir **grandes debates e iniciativas en las que el PP se vea forzado a discutir de políticas concretas porque, de no hacerlo, puede ver erosionadas sus bases electorales**. Un ejemplo de excelencia lo tenemos en la propuesta que llevó el Presidente del

Gobierno a **la Conferencia de Presidentes** sobre el pacto entre las CCAA y el Gobierno central para impulsar **el desarrollo de la nueva política de vivienda**. Las Comunidades Autónomas regidas por el PP se vieron en la tesitura de rechazar una oferta muy significativa de financiación para la construcción de viviendas de titularidad pública, con el resultado de tener que explicar a sus votantes las consecuencias de tal negativa. Esta oferta tendrá, sin duda, **un largo recorrido** y, en la medida en que se profundice, llevando adelante el plan con las cinco CCAA que lo aceptaron, irá colocando a los barones del PP en una posición cada día más difícil de justificar ante sus bases electorales autonómicas. Sin duda, el espíritu y el sentido estratégico de esta primera iniciativa **se podría reproducir en el futuro en otros frentes**: uno de ellos es superar la eterna discusión sobre financiación autonómica abriendo un nuevo gran capítulo para la consolidación de estado autonómico en torno al **Desarrollo Económico Regional de España** (algo que quedó establecido como una nueva avenida autonómica para España en el 41º Congreso del PSOE), dando así una nueva vía de solución a la dinámica aún no abordada estructuralmente de la España vaciada rural, del interior y del sur de España.

En términos generales, la cuestión de fondo **es la actitud con la que se aborda esta segunda parte de la legislatura**: mirar con ambición renovada, al comienzo de esta segunda parte, a las preocupaciones de la gente con el ánimo de resolver sus problemas. Y ahí están altos y claros en los barómetros de diversas casas de investigación sociológica: la vivienda, con diferencia, a continuación, el paro, los problemas de índole económica (los salarios, la capacidad de redistribución, la amenaza latente de pobreza infantil), la inmigración, la calidad en el empleo y la sanidad. En todos ellos se necesita nuevas políticas concretas e innovadoras.

No sería descabellado que, a partir de reflexiones estratégicas de esta índole o parecidas, se renovara de modo explícito el pacto de gobierno entre sus dos socios. Es posible y es necesario abordar esta segunda parte de la legislatura con el mismo ímpetu y ambición que la primera, de modo que el resultado final del partido sea victorioso para las fuerzas de progreso en España.